



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Informe firma conjunta

Número:

Referencia: Voc XI. Expediente N° 37.331-I caratulado “Grimoldi S.A.s/ apelación”. Sentencia

En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10° Nominación), la Dra. Agustina O'Donnell (Vocalía de la 11° Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el **Expediente N° 37.331-I** caratulado “**Grimoldi S.A.s/ apelación**”,

La Dra. O'Donnell dijo:

I. Grimoldi S.A interpone el recurso de apelación que prevé el art 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones N° 155/2012 (DV DEOB) y 156/2012 (DV DEOB) dictadas por la División Determinaciones de Oficio “B” de la Administración Federal de Ingresos Públicos el 26 de diciembre de 2012 en las que:

a. Res. N° 155/2012, se determinó de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2006 por la suma de \$1.539.423,19, estableciendo un saldo a favor de Grimoldi S.A. de \$153.162,56 como consecuencia de haber computado contra el impuesto determinado el pago a cuenta del impuesto a la ganancia mínima presunta, así como retenciones y percepciones;

b. Res. N° 156/2012, se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado por los periodos fiscales 2/2006 a 4/2006 y 6/2006 a 9/2006, intimándose a pagar \$20.337,07, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).

Además, en este último acto se le aplicó una multa de omisión de \$14.235,95 (art. 45, ley 11.683).

En su presentación ante este Tribunal, en primer lugar califica a las Resoluciones de arbitrarias y plantea su nulidad “*por la prescindencia injustificada de prueba decisiva para desentrañar la verdadera situación fiscal de mi mandante*”, en el entendimiento que las ofrecidas en ocasión de contestar la vista de los ajustes –art. 17, ley 11.683- no fueron correctamente analizadas, así como también por haberse rechazado las pruebas informativa y pericial contable.

Continúa exponiendo que los ajustes notificados en el impuesto a las ganancias en la Res. N° 155/2012 consisten en la impugnación de los gastos iniciales incurridos con motivo del lanzamiento del Fideicomiso Financiero

Grimoldi I, que al negarle vinculación con la obtención de las rentas gravadas el juez administrativo calificó como liberalidad, por aplicación del art. 88, inc. i) de la ley del gravamen (t.v. 1997 y modif.).

Explica que el Fideicomiso fue constituido el 23 de marzo de 2006 en el marco del Programa Supertrust Fideicomisos Financieros organizado por el Banco Río de la Plata S.A., bajo el régimen de la ley 24.441 y la Res. CNV N° 271/95. El fiduciario era Equity Trust Company (Argentina) S.A., el fiduciante Grimoldi S.A. y el administrador y organizador para la colocación de los certificados, el Banco Río de la Plata S.A.

En el Contrato de constitución se ofrecieron valores representativos de deuda por \$20.000.000 a una tasa variable con vencimiento a cuatro años de la fecha de emisión. Grimoldi S.A. cedió los derechos de cobro generados por las ventas futuras que se realicen con tarjetas de crédito. Respecto a los pagos de los valores representativos de deuda, se pactó su pago para el día 23 de cada mes, iniciando en abril del 2006 y finalizando en marzo de 2010.

Agrega que del Contrato surge también que los gastos previos a la constitución del Fideicomiso (a los que denomina gastos iniciales) estaban a cargo de Grimoldi S.A. por lo que fueron registrados en su contabilidad –Cuenta “Organización y Lanzamiento Fideicomiso”- y fue por ello que en el período fiscal 2006 dedujo del impuesto a las ganancias dichos gastos y computó créditos fiscales en el impuesto al valor agregado por los siguientes conceptos:

- los gastos previos a la constitución del Fideicomiso: los servicios facturados a Grimoldi S.A. por Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. y por el Estudio Ahumada & Fernando Asoc. S.A. en concepto de análisis de viabilidad del fideicomiso, de calificación de riesgo y de potenciales inversores;

Agrega que estos gastos fueron incurridos para evaluar si el fideicomiso era un instrumento de financiación válido y apropiado para Grimoldi S.A.

- los gastos de constitución y puesta en funcionamiento del Fideicomiso: gastos de administración, comisión por colocación y demás gastos denominados como *iniciales* en el Punto 2.9. del *Contrato Suplementario de términos y condiciones del Fideicomiso*, que asumió y tenía a su cargo como fiduciante.

Aclara que en dicho carácter no aceptó estos gastos *por gracia o desgano en la negociación*, sino porque era el fiduciante que es quien requiere los fondos y quien termina pagando todos los costos y gastos que la operatoria demanda. Dice así que “*Pensar que los gastos iniciales del fideicomiso serán soportados por alguno de los otros sujetos del contrato, como el fiduciario o el banco colocador (que son quienes hacen de la estructura del fideicomiso su negocio sin asumir riesgos) o por los inversores (que son los que desean obtener una rentabilidad –interés- por aportar fondos a riesgo) o es ingenuo, es un intento deliberado y agravante de retorcer la realidad económica de la operación*”.

Y ejemplifica a continuación, “*Acaso el gasto de un hijo no es el gasto del padre que lo mantiene*”.

Concluye así que pueden existir ciertos gastos facturados al fideicomiso, pero ello no cambia la naturaleza de que fueron gastos propios de Grimoldi S.A., facturados por cuenta y orden de ésta, y, por ende, deducibles del impuesto a las ganancias.

- el impuesto sobre los débitos y créditos previsto en la ley 25.413 y sus regl. por la acreditación de los fondos obtenidos por la financiación soportado por Grimoldi S.A. que fue debitado de la cuenta corriente de Grimoldi S.A.

Respecto a este concepto, sostiene que si hubiera recurrido a otras formas de financiación -vgr. préstamos-, el impuesto también lo hubiera deducido del impuesto, dando cuenta así de la ilegitimidad de la pretensión fiscal.

Sostiene entonces Grimoldi S.A. que las deducciones deben ser admitidas por tratarse en todos los casos de gastos necesarios que reúnen los requisitos previstos en los arts. 17 y 80 de la ley de impuesto a las ganancias. Afirma que el fideicomiso, como instrumento de financiación que es, fue constituido para obtener asistencia crediticia y que en materia de gastos no es diferente de los que se incurren en la suscripción de un préstamo, ya que en ambos supuestos el fin es mantener la fuente generadora de ingresos.

Por ello, solicita se deje sin efecto la pretensión fiscal notificada en ambos gravámenes, así como también la sanción aplicada en el impuesto al valor agregado, dada la ausencia de la contradicción entre la conducta desplegada y el ordenamiento jurídico.

Ofrece la producción de prueba informativa y pericial contable, y solicita que se revoken las Resoluciones, con costas.

II. A fs. 115 la representación fiscal contesta el traslado del recurso, solicitando que se confirmen sus actos, también con costas.

Para ello, sostiene que Grimoldi S.A. hizo los gastos iniciales del lanzamiento del Fideicomiso Financiero Grimoldi I que corresponden tributariamente a otro sujeto y que no tienen vinculación directa con sus operaciones gravadas, por lo que deben ser considerados como una liberalidad, así como también que algunos de los comprobantes de gastos que dedujo se hallaban facturados a ella y no al fideicomiso, resultando en ambos supuestos impropio la deducción en el impuesto a las ganancias.

Entiende entonces, que los gastos que dedujo Grimoldi S.A. no tienen ligamen con las operaciones de Grimoldi S.A. por lo que deben tratarse conforme a cada una de las leyes aplicables. Insiste que si decidió hacerse cargo voluntariamente de los gastos iniciales, ello constituye una liberalidad y no corresponde que los deduzca, ni tampoco corresponde el cómputo del crédito fiscal en el impuesto al valor agregado.

III. A fs. 139 se abre la causa a prueba y se hace lugar a la prueba informativa, cuyos resultados obran a fs. 148/162 y a la prueba pericial contable, que obra a fs. 164/168. A fs. 180 se hace saber la integración de la Sala desde el 9 de abril de 2018; a fs. 187, se clausura el periodo probatorio y se ponen para alegar, obrando los escritos presentados a fs. 200/217. Por último, a fs. 218 quedan en estado de dictar sentencia.

IV. Corresponde referirse, en primer término, a la defensa de nulidad opuesta por la recurrente por supuestos vicios en la motivación de las Resoluciones, que debe ser rechazada en tanto se sustentan en los mismos argumentos con los que critica la pretensión fiscal, es decir que en realidad lo que pretende es atacar los fundamentos de la determinación de oficio recurrida, los que serán analizados en los siguientes párrafos al resolverse sobre la legitimidad de la pretensión fiscal.

Cabe recordar, asimismo, que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido, menos aún acreditados.

Así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Cámara que ejerce como tribunal de alzada de este tribunal al decir que “...cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia

Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012. También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI” y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” -conf. “Bringas Raul”, sentencia del 1.10.2020, entre otros-.

Por ello, debe rechazarse el planteo, sin costas (*Fallos* 336:70, “Bolland”).

V. Queda entonces resolver sobre la legitimidad de los ajustes notificados en las Resoluciones recurridas para lo cual debe estarse a los agravios presentados contra los mismos, y a los resultados de las pruebas aportadas y producidas, tanto en esta instancia como en la administrativa previamente sustanciada.

El Fisco Nacional, conforme las facultades que le son propias, inició un procedimiento de fiscalización a Grimoldi S.A. a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en el trámite del cual se impugnó el tratamiento impositivo que dio a los gastos vinculados al lanzamiento del denominado *Fideicomiso Financiero Grimoldi I*, tanto en el impuesto a las ganancias como en el impuesto al valor agregado.

No se encuentra en discusión, ya que así obra acreditado, que los gastos corresponden al Fideicomiso en el que Grimoldi S.A. era fiduciante, el Banco Rio de la Plata S.A. su administrador y colocador y Equity Trust Company (Argentina) S.A., su fiduciario.

Grimoldi S.A., que es quien aquí interesa, aportó los activos fideicomitidos, constituidos por los derechos creditorios del banco fiduciante originados en las ventas con tarjetas de crédito cuya titularidad fue transferida a Equity Trust Company Argentina S.A.

Surge de las act. adm. también que la CNV otorgó la autorización para funcionar el 9 de marzo de 2006 y que el fideicomiso inició sus operaciones el 23 de marzo del mismo año.

No se encuentra en tela de juicio tampoco que el fideicomiso está inscripto como contribuyente –CUIT 30-70956063-4, y que es sujeto del impuesto a las ganancias, por lo que a fs. 529/532 obra la copia de la declaración jurada y sus papeles de trabajo que presentara en el período fiscal 2006. Allí consigna un monto de activo de igual importe al pasivo, sin determinar impuesto.

Se trata, según explica Grimoldi S.A. en su presentación ante este Tribunal, de un fideicomiso financiero que constituyó a efectos de obtener financiación en el mercado de capitales, y que fue por ello que solicitó los servicios de la firma Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A., del Estudio Ahumada & Ferrando Asociados S.A. que emitieron sus comprobantes fiscales entre febrero y septiembre de 2006, conforme surge de los comprobantes que obran en las act. adm. y del informe pericial contable a fs. 164/169 de este expediente. A estos gastos Grimoldi S.A. denomina como *gastos previos a la constitución del fideicomiso*.

En el oficio que se librara a dichas empresas, a fs.157, el apoderado de Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. dice que “...la sociedad Grimoldi S.A. encargó efectuar a fines del año 2005, un estudio para evaluar la factibilidad de constituir un fideicomiso”, y que “...dicho trabajo implicó el análisis de la compañía como generador de los créditos cedidos al Fideicomiso Financiero y el análisis del fideicomiso per se”. Agrega a continuación que “Ese análisis dio como resultado el informe publicado el 09.02.2006 que en copia se adjunta”,

bajo el nombre de Fitch Raitings- Finanzas Estructuradas. En el informe en cuestión, que obra agregado a fs. 148/156, se expresa que “El Consejo de Calificación de Fitch Argentina Calificadora de Riesgos, reunido el 9 de febrero de 2006”, asignó la siguiente calificación a los Valores Representativos de Deuda a ser emitidos por el Fideicomiso Financiero Grimoldi I:...”. Se hace allí referencia a la documentación e información presentada por el emisor y sus asesores.

El concepto facturado a Grimoldi S.A. por dicho proveedor fue “Servicios de calificación nacional de Finanzas Estructuradas –activos cedidos por ventas con tarjeta de crédito (contrato firmado el 11-10-2005)”.

Por su parte, el Dr. Sergio Ferrando, del Estudio Ahumada & Ferrando Asociados S.A., detalló que brindó asesoramiento en materia económica financiera a los directivos encargados de conducir las negociaciones y que participaron de las reuniones con los bancos, entre otras tareas. Destaca que sus servicios se prestaron a través de informes y/o memos El concepto facturado por dicho proveedor fue “honorarios profesionales”.

Por último, debe hacerse mención al gasto facturado por la Escribanía Maschwitz en concepto de sellos y derechos y honorarios por certificación de firmas de los contratos y otras tareas de febrero y marzo de 2006

Teniendo en cuenta la fecha de constitución e inicio de operaciones del fideicomiso, el 23 de marzo de 2006, puede admitirse razonablemente que estos gastos fueron *previos* a la decisión adoptada por Grimoldi S.A. de constituir el fideicomiso y, como tales, deducibles por haber sido gastos necesarios para generar ganancias gravadas.

Cabe recordar que el art. 80 de la ley del gravamen dispone que “los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina. Cuando los gastos se efectúen con el objeto de obtener, mantener y conservar ganancias gravadas y no gravadas, generadas por distintas fuentes productoras, la deducción se hará de las ganancias brutas que produce cada una de ellas en la parte o proporción respectiva...”.

La deducibilidad de dichos gastos, cabe señalarlo, responde a su condición de servicios profesionales de consultoría y asesoramiento, los propósitos que tuvieron para Grimoldi S.A. y, en especial, la oportunidad en que se incurrieron, previo al inicio de actividades del fideicomiso, no a lo dispuesto por las partes intervinientes en el Contrato Constitutivo: “*Artículo 2.9. (b) El Fiduciante aportara los fondos necesarios para pagar tales Gastos Iniciales del Fideicomiso, mediante la deducción de los montos correspondientes en la Cuenta Operativa previo al pago del Precio de los Activos Fideicomitidos y transferencia inmediata a la Cuenta de Gastos Ordinarios. (c) Los gastos iniciales del Fideicomiso que deban pagarse con anterioridad a la recepción de los fondos provenientes de la colocación serán adelantados por el Fiduciante, y luego de deducidos conforme el inciso anterior, serán reembolsados al Fiduciante*”. Los acuerdos entre las partes respecto del modo de conducir sus actividades y soportar los gastos y costos de sus actividades, aunque huelga decirlo, no subvierten lo dispuesto en forma expresa en la materia en la ley del gravamen en sus arts. 17 y 80.

Además, tanto el perito de Grimoldi S.A. como el del Fisco Nacional en el informe pericial obrante a fs. 164/168 informan que existe contemporaneidad entre estos gastos impugnados y el inicio del fideicomiso, lo que revela que fueron anteriores al inicio de actividades del fideicomiso y de las aprobaciones estatales (CNV) que al ser propios del desarrollo de su actividad fueron gastos necesarios y que, por ende, mal pueden ser calificados como una *liberalidad*, como sostuvo el juez administrativo al fundar la pretensión fiscal. Para ello tengo en cuenta la documentación obrante en las act. adm., en especial la fecha del informe de Fitch Ratings Argentina S.A. en

febrero de 2005 y la referencia que allí se hace a la actuación de asesores de Grimoldi S.A. y la referencia a un contrato de asesoramiento del 11 de octubre de 2005 que vinculó a las partes.

Corresponde entonces reconocer su condición de gastos vinculados a sus operaciones gravadas y, por los mismos motivos, los créditos fiscales computados en el impuesto al valor agregado en virtud de tales operaciones son procedentes, correspondiendo que en este aspecto se deje sin efecto la pretensión fiscal notificada en las Resoluciones.

Distinto es el criterio a adoptarse respecto de los gastos del Banco Santander Río que, ya se dijo, actuó como administrador del fideicomiso y colocador de los certificados, a los que la recurrente denomina *gastos iniciales de constitución del fideicomiso*, ya que a la fecha en que fueron incurridos el fideicomiso estaba constituido y autorizado por la CNV para funcionar como tal: se trata sí de *gastos iniciales*, de ejecución de sus términos, propios del funcionamiento de las actividades de dicho sujeto que es un sujeto diferente a Grimoldi S.A., con su propio CUIT, su propia contabilidad y contribuyente del impuesto a las ganancias por sus resultados; sin perjuicio de lo que contractualmente acuerden las partes en cuanto a la carga de los mismos, su pago y reintegro.

Así surge de lo informado por el banco a fs. 158/159 que da cuenta de gastos por abogados, comisiones por colocación y por estructuración, de bolsa, entre otros rendidos al fideicomiso. Si bien Grimoldi S.A. aduce que tales gastos fueron en realidad por cuenta y orden de ella, no existen constancias documentales, ni se han rendido pruebas en tal sentido.

Tales gastos, entonces, no resultan deducibles del impuesto a las ganancias, ni tampoco resultan computables los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado, por lo que debe confirmarse en este aspecto ambas Resoluciones, tanto en cuanto al capital como los intereses intimados.

Tampoco es deducible para Grimoldi S.A. el importe pagado por el impuesto sobre los débitos y créditos, ley 25.413 y sus regl., por los movimientos en la cuenta corriente de titularidad de dicha empresa, que como surge de las pruebas rendidas, en particular de la prueba pericial contable a fs. 164/169, tuvieron lugar el 23 de marzo de 2006, ya en actividad y en pleno funcionamiento el mismo, sin que la *realidad económica subyacente*, ni la comparación que se hace con instrumentos financieros (préstamo), que como excusa invoca Grimoldi S.A. en su recurso de apelación ante este Tribunal, pueda modificar el texto de la ley del que con arreglo al principio de legalidad que rige en materia tributaria no corresponde apartarse. Ello, porque aunque pueda tratarse de actos jurídicos con la misma finalidad y objeto nada obsta a que el tratamiento tributario sea diferente, sin que la elección del contribuyente de uno u otra conforme a su propia decisión empresarial pueda alterar los términos del régimen normativo aplicable a cada uno.

Además, es Grimoldi S.A. la que informa que los pagos del gravamen responden a la *cobranza de fondos*, es decir que se trata de gastos propios de funcionamiento del fideicomiso financiero, sujeto fiscal diferente, como ya se señaló obligado a declarar sus propios hechos imponible y eventuales resultados.

Por lo expuesto, corresponde confirmar parcialmente las Resoluciones N°155/2012 y 156/2012, imponiéndose las costas en proporción a los respectivos vencimientos.

VI. Queda referirse a la multa de omisión aplicada en el impuesto al valor agregado en la Resolución N° 156/2012, la que por la forma en que se resuelve respecto a los ajustes en dicho gravamen debe ser dejada sin efecto, con costas.

Corresponde entonces ordenar al Fisco Nacional que en el plazo de treinta (30) días practique la liquidación

correspondiente a fin de establecer el monto adeudado. A tal fin, por Secretaría General de Asuntos Impositivos remítanse los antecedentes administrativos por el plazo indicado.

El Dr. Martín dijo:

I.- Que comparto el relato de los hechos efectuado en el voto de la Dra. O' Donnell como así también lo decidido en el mismo en lo que hace a lo resuelto en el Considerando IV.

II.- Que en autos el ente fiscal impugnó gastos deducidos en el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2006 y créditos fiscales computados en el Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales 02/2006 a 04/2006 y 06/2006 a 09/2006 con fundamento en que los mismos resultaban ajenos a la actividad generadora de ingresos de Grimoldi S.A., quien se dedica a la fabricación de calzado de cuero.

Que la empresa recurrente en su calidad de fiduciante constituyó con fecha 23 de marzo de 2006 el Fideicomiso Financiero Grimoldi I y se hizo cargo de los denominados “Gastos Iniciales”, los que dieron sustento a los conceptos impugnados, por lo que se debe analizar la documentación y pruebas producidas a los efectos de su viabilidad.

En el caso de Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A., a fs. 157 de autos la empresa informó que Grimoldi S.A. le encargó a fines del año 2005 un estudio para evaluar la factibilidad de constituir un fideicomiso, lo que dio como resultado el informe publicado con fecha 9 de febrero de 2006, cuya copia se agregó a fs. 148/156. Que a fs. 164/168 los peritos contadores presentaron su informe, en cuyos puntos 1) y 4) detallaron los comprobantes impugnados, mientras que en el punto 5) se precisó que los conceptos facturados respondían a “servicios de calificación nacional de Finanzas Estructurales”. Ello así, en este caso se presentan cuatro facturas, de fechas 08/02/2006, 13/03/2006, 22/03/2006 y 06/04/2006 (act. adm. cpo. de Inspección N° 3, fs. 468/471), por lo que teniendo en cuenta que el fideicomiso fue constituido el día 23 de marzo de 2006, corresponde admitir únicamente a los efectos de la deducción del gasto y cómputo del crédito fiscal los montos facturados con anterioridad, es decir los comprobantes de fechas 08/02/2006, 13/03/2006 y 22/03/2006, más aún cuando la labor contratada culminó con el informe del 9/02/2006.

Respecto Estudio Ahumada & Fernando Asoc. S.A., conforme se desprende del relato de la Vocal Instructora y de la contestación del oficio obrante a fs. 162 la firma manifestó que Grimoldi S.A. les solicitó asesoramiento sobre la constitución de un fideicomiso financiero y que la prestación de sus servicios se inició en octubre de 2005 hasta abril de 2006 aproximadamente, lo que consistió en asesoramiento en materia económico – financiero a los directivos encargados de las negociaciones. Aclararon que el mencionado servicio no fue prestado a través de informes y/o memos, por lo que no resultó posible que acompañen documentación alguna. En el informe pericial contable, puntos 4) y 5), se especificó que el concepto facturado por este proveedor respondía a “honorarios profesionales”, y teniendo en cuenta que las cuatro facturas son de fechas posteriores a la constitución del Fideicomiso (21/06/2006, 25/07/2006, 22/08/2006 y 25/09/2006 -act. adm. cpo. de Inspección N° 3, fs. 478/481-), corresponde convalidar al respecto el criterio fiscal.

Que en lo que hace a los conceptos facturados por la Escribanía Enrique Maschwitz, siguiendo el mismo lineamiento sostenido en los casos precedentes, cabe admitir la deducción/cómputo del concepto facturado en fecha 14/03/2006 y no la factura correspondiente al día 10/04/2006 (act. adm. cpo. de Inspección N° 3, fs. 474 y 475).

Que por oficio agregado a fs. 158/161 del presente Expte. el Banco Santander Río S.A. informó sobre los gastos impugnados, los que tienen fecha 23/03/2006, y entre los que se encuentra además el pago del Impuesto sobre los

Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria, también observado por el ente fiscal. Que sobre tales conceptos se compartan las razones expuestas en el voto de la Vocal Instructora para no permitir su cómputo y/o deducción.

Que ello así, voto por confirmar parcialmente el ajuste practicado según lo expuesto en el Considerando precedente.

III.- Que también procede confirmar en la proporción correspondiente los intereses resarcitorios liquidados en la Resolución 156/2012, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.).

IV.- Que la multa aplicada en la Resolución 156/2012 debe ser confirmada en la proporción correspondiente al encontrarse acreditados los elementos que permiten encuadrar la conducta de la recurrente en dicha figura al configurarse el presupuesto básico de omisión de pago, sin que haya logrado acreditar la falta de culpa en su accionar, ni tampoco la existencia de un error con entidad para eximirla.

V.- Costas según los respectivos vencimientos.

La Dra. Gómez dijo:

Que adhiere al voto del Dr Martín.

Atento al resultado de la votación que antecede, por mayoría,

SE RESUELVE:

1º) Confirmar parcialmente los ajustes practicados en las Resoluciones Nros. 155/2012 y 156/2012 con los alcances dispuestos en el voto de la mayoría, más intereses resarcitorios en la proporción correspondiente.

2º) Confirmar la multa impuesta en la Resolución N° 156/2012 en la proporción correspondiente al ajuste que se confirma.

3º) Imponer las costas según los respectivos vencimientos.

4º) Ordenar a la Administración Federal de Ingresos Públicos que en el término de 30 días practique liquidación de las sumas que en definitiva deberá ingresar la recurrente. A tal fin, por Secretaría General de Asuntos Impositivos remitir los antecedentes administrativos por el plazo indicado.

5º) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta que se apruebe la liquidación ordenada.

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

